
EL "LABORATORIO BOLIVIANO":
CAMBIOS, TENSIONES Y AMBIVALENCIAS
DEL GOBIERNO DE EVO MORALES

*Maristella Svampa**

El problema del indígena es esencialmente un problema de colonialismo interno. Las comunidades indígenas son nuestras colonias internas. La comunidad indígena es una colonia en el interior de los límites nacionales. La comunidad indígena tiene las características de la sociedad colonizada.

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA, *Sociología de la explotación*¹

La captación del excedente ha sido siempre un concepto ajeno a la clase dominante en Bolivia y eso, lo mismo en las dos economías de la plata que en la del estaño. En otros términos, es necesario revisar las causas por las que Bolivia fue incapaz de externalizar su excedente pero es, en cambio, muy rebatible sostener que el excedente no existió.

RENÉ ZAVALETA MERCADO, *Lo nacional-popular en Bolivia*²

En este texto nuestro propósito es analizar algunos de los temas centrales que atraviesan la actual escena política boliviana, subrayar los avances realizados por la gestión comandada por Evo Morales y, a la vez, dar cuenta de las tensiones y ambivalencias que recorren el proyecto de cambio. En razón de ello, buscaremos concentrar nuestra atención en tres ejes. En primer lugar, exploraremos las diversas vías que ha recorrido la relación entre las organizaciones y movimientos sociales y el gobierno del MAS, muy especialmente a través de los diferentes roles que las organizaciones sociales han desempeñado en el seno de la Asamblea Constituyente. En segundo lugar, abordaremos los elementos de corte nacional-popular que recorren el discurso y la gestión de Evo Morales. Por último, daremos cuenta de un tema poco presente en el debate político boliviano, pero

que seguramente ocupará un espacio mayor en los tiempos por venir, respecto del modelo de desarrollo de claro corte extractivista continuado por el gobierno.

LA ESPECIFICIDAD DE LA ESCENA POLÍTICA BOLIVIANA

Por ello es que no pueden soslayar su nexos con las bases, ni la necesidad de encontrarse con la fuerza autodeterminativa de sus movilizaciones, que emana de esos micropoderes locales entrelazados que son las jilaqaturas y sindicatos rurales, los comités de bloqueo y las juntas de barrio, los gremios y asociaciones que rearticulan el espacio nacional en una densa red de ideologías y consignas compartidas, donde la comunidad-mapa (visión de los varones) se amarra con la comunidad-tejido (visión de las mujeres) y se genera una nueva praxis de producción y circulación de saberes prácticos y productivos tanto como éticos y organizativos.

SILVIA RIVERA CUSICANQUI, *Oprimidos pero no vencidos*³

¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales en el nuevo gobierno de Evo Morales, cuáles sus aportes en el difícil proceso de construcción de la nueva institucionalidad, y cuáles las principales tensiones que han atravesado la relación entre ambos? Recordemos que, en términos generales, la literatura político-sociológica suele afirmar que una de las grandes debilidades de los movimientos sociales es la dificultad por pasar de una acción de carácter defensivo o de corte destituyente (que suele permear el ciclo de ascenso de las luchas) a un tipo de acción instituyente y/o institucional, que plantee la disputa de poder en el interior del Estado. En contraste con ello, también se acostumbra señalar la tendencia a la institucionalización, en el límite, la estatalización, como uno de los primeros grandes riesgos que afrontan los movimientos sociales que se suman a la construcción de poder desde el Estado, como sucede en la actualidad en el contexto de los llamados gobiernos progresistas y de izquierda que recorren una parte del escenario latinoamericano.

La posibilidad de dar respuesta a estas preguntas —y los dilemas que ellas plantean— demanda un conjunto de observaciones previas, vinculadas al carácter de la sociedad boliviana. En este sentido, y respecto de los actores en juego, realizaremos tres

puntualizaciones. La primera tiene que ver con el tipo de organizaciones sociales involucradas. Si bien es difícil dar cuenta de su diversidad, en Bolivia, como en buena parte de los países andinos, la mayor parte de las organizaciones remiten a un tejido social comunitario, urbano o rural, de carácter plebeyo, aun si, dadas la heterogeneidad étnica, social y regional, aquéllas varían en su modulación y densidad. En otros términos, aunque la matriz comunitaria se halla presente en un conjunto importantísimo de organizaciones, son variadas tanto las figuras como las formas de pregnancia de la comunidad, ya que éstas incluyen desde los sindicatos campesinos y las comunidades rurales hasta las asociaciones vecinales urbanas, sindicatos de oficios y cooperativas mineras, entre otros.

Veamos cuatro casos de figura que, lejos de ser exhaustivos o de querer resumir una tipología cerrada, permiten al menos aproximarnos a la complejidad socioorganizativa del país. Comencemos por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), uno de los grandes actores de la política boliviana, que surge del sindicalismo campesino en Cochabamba, aunque se generaliza en todo el territorio nacional luego de la revolución nacionalista del '52. La CSUTCB es la expresión más acabada de articulación entre estructura comunal, discurso indianista y acción sindical, marco en el cual se han elaborado "las propuestas políticas de emancipación indígena más importantes del sindicalismo comunal boliviano".⁴ En términos organizativos, agrupa nueve federaciones departamentales, además de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMCB-BS).

Un segundo tipo de figura lo presenta el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), una organización indígena rural, asentada en regiones aymaras/quechuas, que surge en 1997 en cuestionamiento al sindicalismo campesino, como fruto de la organización de los *ayllus*,⁵ pero también de las instituciones no gubernamentales (Taller de Historia Oral Andina, Cooperación Danesa). En CONAMAQ aparece la figura de la comunidad en un sentido fuerte, pues el *ayllu* está en la base de las diferentes estructuras reguladoras de la vida social (la reconstitución de las autoridades originarias), al tiempo que la reconstrucción del Tawantinsuyu⁶ diseña el horizonte político.

La tercera figura aparece ilustrada por el movimiento cocalero, surgido en las últimas décadas en una zona de migración reciente, como el Chapare, donde encontramos la forma sindicato, proveniente de la época del nacionalismo revolucionario, figura que pervive y se combina con ciertas inercias comunitarias, las que sin embargo tienden a regular el conjunto de la vida social. Pese a sus evidentes lazos con la CSUTCB, el movimiento cocalero está mucho más atravesado por un lenguaje antiimperialista (contra la intervención de los Estados Unidos y su agencia, la DEA —Drug Enforcement Administration—) que por un discurso de carácter indianista.

Por último, un cuarto caso de figura es el de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), vinculada a la lucha por los servicios básicos desde fines de los años 50. En el caso de la ciudad de El Alto, la FEJUVE ha ido anudando un conjunto de redes sociales multidimensionales (de tipo laboral, vecinal, de parentesco y de amistad) que inscriben su acción en un escenario de mestizaje cultural, en el cual lo indígena-comunitario se presenta entremezclado con los nuevos rasgos plebeyos de la cultura urbana.⁷

La segunda consideración fundamental respecto de los actores sociales está ligada a su enorme cantidad o, para decirlo de otro modo, al complejo campo multiorganizativo que se ha ido diseñando en los últimos años. En este sentido, el nuevo escenario político debe incluir no solamente a aquellas organizaciones que entre 2000 y 2005 tuvieron mayor visibilidad a partir de la acción callejera, como es el caso de las seis federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba, la CSUTCB o la FEJUVE, sino también a las organizaciones indígenas rurales, como la ya citada CONAMAQ, o aquellas más pequeñas, provenientes del Oriente boliviano, como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB, por su denominación original: Confederación Indígena del Oriente Boliviano) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que en los 90 adoptaron una vía más institucional —vinculándose al proliferante mundo de las ONG— y cuyo aporte al proceso de construcción de la nueva institucionalidad ha sido importante.

La tercera aclaración está vinculada a las características del partido en el gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS). Ciertamente, el MAS está lejos de ser un partido en el sentido convencional. En un contexto abierto por la Ley de Participación

Popular (que permitió la municipalización de los partidos), y de crisis de los partidos políticos tradicionales, surgió la tesis del "instrumento político" de las organizaciones campesino-indígenas. Ésta fue aprobada en 1995 y contó con la participación de varias organizaciones históricas, entre ellas, la CSUTCB, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) [actualmente, Comunidades Interculturales de Bolivia], la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS) y la CIDOB. Un año después, Evo Morales, junto con un sector de la CSUTCB, creó la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP). Más tarde, en medio de un clima de rivalidad con el líder aymara Felipe Quispe —entonces dirigente de la CSUTCB— y de ruptura con el dirigente campesino de los Valles de Cochabamba, Alejo Véliz Morales —electo diputado en 1997—, funda el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), que al no lograr la personería jurídica consigue la sigla del MAS, que entonces pertenecía un pequeño partido de origen falangista que había girado a la izquierda.⁸

De manera oficial éste se convirtió en el MAS-IPSP en 1999 y rápidamente conoció una serie de éxitos electorales a nivel local, conquistando nueve alcaldías. En medio de un contexto represivo, el MAS experimentó un crecimiento muy rápido, sobre todo en los distritos rurales. En 2002, encabezando el MAS-IPSP, Evo Morales quedó a menos de dos puntos de Gonzalo Sánchez de Lozada en las elecciones presidenciales. La irrupción en la arena parlamentaria produjo cambios en la composición del partido-movimiento, con la entrada de intelectuales provenientes de la izquierda y "clasemedios", muchos de ellos ex militantes de izquierda, lo cual generó una serie de tensiones con los dirigentes de origen campesino. Tras su arribo al poder, en enero de 2006, frente a la falta de cuadros propios, el MAS profundizó la tendencia a incorporar intelectuales y ex militantes de izquierda, muchos de ellos provenientes de ONG vinculadas a organizaciones indígenas. En esos primeros tiempos, según el politólogo Hervé Do Alto, la figura predominante en el MAS sería la del "compañero de ruta". Sin embargo, lejos de devenir un partido tradicional dominado por las clases medias urbanas, en su sincretismo ideológico (que combina nacionalismo con marxismo e

indianismo), el MAS aparecía “como un proyecto elaborado desde el mundo campesino-indígena, al cual se incorporaba —no sin tensiones— esta misma intelectualidad de clase media”.⁹

Hechas estas aclaraciones, que nos permiten ponderar en su justa medida el complejo y poco convencional escenario político que ofrece la Bolivia actual, es posible comprender por qué, durante los cuatro años de su primer mandato, Evo Morales no cesó de presentar su gestión como el “gobierno de los movimientos sociales”. Sin embargo, la cuestión está lejos de ser lineal, dadas las fronteras siempre móviles y porosas existentes entre el partido en el gobierno y las organizaciones sociales. En realidad, la relación organizaciones sociales/partido en el gobierno, lejos de desarrollarse por un canal único, netamente identificatorio, ha ido recorriendo diferentes vías y escenarios, que incluyen desde las transformaciones sufridas por el MAS (sobre todo, a partir de las nuevas alianzas que apuntan a su expansión en el ámbito urbano y regional, así como a un mayor acercamiento a las clases medias) hasta las inflexiones corporativas de no pocas organizaciones sociales, frente a la apertura de nuevas oportunidades políticas. Pero el escenario privilegiado en el cual es posible sopesar las diversas modalidades de las relaciones entabladas entre organizaciones sociales y gobierno lo constituyó, sin duda, la Asamblea Constituyente.

Como hemos señalado en la Introducción a este volumen, uno de los grandes logros de las organizaciones sociales bolivianas fue la convergencia en un programa común (la “agenda de octubre”), el cual insertó las luchas colectivas en un horizonte político más amplio. Apenas asumido, el gobierno de Evo Morales motorizó las acciones necesarias a fin de hacer realidad las dos consignas que encabezaban esa agenda. Sin embargo, mientras que la primera de ellas —nacionalización de los hidrocarburos— remitía exclusivamente a la esfera de acción del nuevo gobierno y pasó a constituirse en uno de los baluartes de la nueva política estatista, la realización de una asamblea constituyente, que era el estandarte de las organizaciones y movimientos sociales, implicaba una articulación más compleja y comprehensiva de los diferentes actores y escenas. En consecuencia, desde sus inicios, la Asamblea Constituyente se insertó en un escenario sumamente dinámico, difícil y conflictivo, convirtiéndose en la arena privilegiada en la cual se fueron desarrollando de manera simultánea las relaciones entre el

reciente gobierno del MAS y la oposición (a través, principalmente, del partido opositor Poder Democrático Social —PODEMOS— y de las fuerzas autonomistas de las regiones sudorientales), como entre el propio gobierno y un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales afines. Las primeras tensiones entre el MAS y las organizaciones sociales movilizadas fueron resueltas de dos maneras: una de ellas se produjo mediante la natural incorporación de varios dirigentes de organizaciones sociales a cargos ministeriales o viceministeriales, como fue el caso de representantes de la FEJUVE, la Confederación Obrera Regional (COR) y los cooperativistas mineros. Otra de las vías, de la que nos ocuparemos aquí, fue la conformación del Pacto de Unidad, a partir de 2004, espacio en el cual coincidieron diferentes organizaciones y movimientos sociales, junto con el MAS, en la elaboración de un novedoso proyecto político que sirvió de base y horizonte en las discusiones de la Asamblea Constituyente. A esto debemos agregar que el nuevo gobierno debió sumar a la “agenda de octubre” el debate sobre las autonomías indígenas y departamentales, impuesto por Santa Cruz, que habilitaba, de este modo, la realización de referéndums regionales, reivindicados por los sectores desplazados.

Veamos, pues, las diferentes dimensiones de esta dinámica en el marco del proceso instituyente.

EL PROYECTO INDÍGENA Y EL PACTO DE UNIDAD

Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos hoy tenemos el desafío de participar en la refundación de Bolivia, construyendo un nuevo país, fundamentado en los pueblos como sujetos colectivos, hacia la construcción de un nuevo Estado Plurinacional, que trascienda el modelo de Estado liberal y monocultural cimentado en el ciudadano individual.

Propuesta del Pacto de Unidad, 2006

Es sabido que uno de los datos relevantes en el actual escenario latinoamericano es el avance de las luchas y conquistas de las autonomías indígenas, lo cual incluye escenarios políticamente tan contrastantes como Bolivia, Ecuador y México, entre otros. En este sentido, el nuevo despertar político de los pueblos indígenas se

instala tanto en el terreno de la memoria larga como en el de la memoria corta de las luchas. En efecto, la relegitimación de las diversas formas de expresión comunitaria ha tenido como telón de fondo el avance de la globalización neoliberal, primero expresado por los llamados ajustes estructurales y los procesos de privatización (de empresas públicas y de recursos naturales), e ilustrado en la actualidad por la expansión de las fronteras del capital hacia los territorios antes considerados improductivos y la consolidación de un modelo extractivo-exportador.¹⁰ Estas nuevas modalidades de dominación colisionan de lleno con los modos de vida de las poblaciones originarias y campesinas, y amenazan en su conjunto la preservación de los recursos básicos para la vida (tierra y territorio). Dichos antagonismos han ido configurando distintas respuestas que, por encima de las tensiones existentes, colocan en el centro la autonomía de los pueblos indígenas, la refundación de la nación a través de la creación de Estados plurinacionales y el reconocimiento de una "legalidad originaria", por la vía de asambleas constituyentes y reformas constitucionales.

En Bolivia, la expresión más acabada del proyecto político campesino-indígena ha sido sin duda el Pacto de Unidad.¹¹ Elaborado y publicado en septiembre de 2006, es una prueba elocuente de la apuesta realizada por importantes organizaciones sociales, de carácter indígena y rural, respecto de los objetivos refundacionales que originariamente planteaba la Asamblea Constituyente. Las organizaciones involucradas en tal propuesta fueron: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia; Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia; Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia; Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa; Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu; Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz; Movimiento Sin Tierra de Bolivia; Asamblea del Pueblo Guaraní; Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni, además de una gran cantidad de ONG.

El documento preparado especialmente para la Asamblea Constituyente planteaba la creación de un Estado comunitario y plurinacional, esto es, su "constitucionalización", lo cual implicaba un nuevo ordenamiento territorial, basado en el reconocimiento de las autonomías indígenas. Es cierto que este proceso

de pensar desde nuevas coordenadas la relación territorio-autonomías indígenas-estructura estatal encuentra sus raíces en los 90. Ya en 1995, en las llamadas tierras bajas,¹² la CIDOB, por medio de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), propuso la Asamblea Constituyente. Asimismo, en lo que respecta al Estado plurinacional, cabe recordar que las primeras propuestas de multiculturalismo fueron obra de las reformas neoliberales, en los 90. Paradójicamente, también fue el neoliberalismo —siempre dirigido por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)— el que incorporó la figura de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO),¹³ bajo cuyo proyecto se entregaron millones de hectáreas a los pueblos originarios, que hoy constituyen la base material e institucional del actual modelo de Estado plurinacional respecto de los indígenas de tierras bajas. Sin embargo, tanto las movilizaciones sociales como la apertura de un nuevo escenario, a partir del ascenso de Evo Morales al poder, insertaron dichas demandas en otro registro político, en el cual el eje central se desplazó hacia ese mundo indígena-campesino tradicionalmente excluido y/o invocado desde el lenguaje de otros actores.¹⁴

Por otro lado, importa destacar que, en Bolivia, según Marxa Chávez León,¹⁵ el concepto de autonomía, hoy tan difundido en el lenguaje de las organizaciones indígenas, fue introducido por la derecha conservadora, con "un significado virtual de extraterritorialidad". En este sentido, la demanda de autonomía parece haber surgido menos como una iniciativa indígena que "como contramedida defensiva". El Pacto de Unidad la definió en estos términos: "La autonomía indígena originaria y campesina es la condición y el principio de libertad de nuestros pueblos y naciones como categoría fundamental de descolonización y autodeterminación; está basada en principios fundamentales y generadores que son los motores de la unidad y articulación social, económica y política al interior de nuestros pueblos y naciones y con el conjunto de la sociedad. Se enmarca en la búsqueda incesante de la construcción de la vida plena, bajo formas propias de representación, administración y propiedad de nuestros territorios".¹⁶

En otro orden, el Pacto de Unidad contemplaba también un nuevo régimen de la tierra y el territorio, sobre la base del "dominio originario" de los recursos no renovables en manos de las naciones y pueblos indígenas y campesinos. Sin embargo, los acuerdos

posteriores se orientaron hacia el reconocimiento de una propiedad compartida entre dichas naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos y el Estado unitario plurinacional. Dicho régimen incluía no sólo la participación en las decisiones mediante consultas populares vinculantes, sino también otras demandas, como la cogestión y coadministración con el Estado plurinacional, vinculada a los recursos naturales.

En cuanto al régimen de tierras, el Pacto de Unidad prohibía, entre otras cosas, el latifundio, así como indicaba que es misión del Estado plurinacional “la distribución equitativa de tierras, previendo los derechos y necesidades actuales y futuras de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos y el bienestar de toda la población”. Otra de las innovaciones importantes era la exigencia del reconocimiento del pluralismo jurídico, esto es, la coexistencia, dentro del Estado plurinacional, de los sistemas jurídicos indígenas originarios y campesinos con el sistema jurídico occidental, en un plano de igualdad, respeto y coordinación. Por último, proponía la creación de un cuarto poder (el poder social), propuesta que, de alguna manera, conllevaba una suerte de reconocimiento e institucionalización alternativa del poder instituyente del cual eran portadoras las organizaciones y los movimientos sociales. Aunque los desarrollos eran muy escasos, éste se proponía como independiente y autónomo del Estado, formado por “representantes de la sociedad civil” (naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, representantes de las organizaciones sociales y otros), y tenía funciones de control social transversal (antes que de autogobierno).

Expresión de la articulación de diferentes organizaciones rurales, indígenas campesinas y ONG, la propuesta sintetizaba así, por primera vez, un proyecto político indígena en el cual se apuntaba a un cambio de las condiciones materiales (una transformación económico-social centrada en la reforma agraria y la nacionalización de los hidrocarburos), al tiempo que se avanzaba sobre aspectos considerados menos “tradicionales”, como la constitucionalización de la justicia comunitaria, el reconocimiento de diferentes tipos de autonomía (departamental, regional, municipal e indígena) y la elección de representantes según usos y costumbres. Son estas cuestiones, asociadas al proceso de descolonización estatal y cultural, las que instalan el caso boliviano en un

campo constitucional novedoso y plantean un reto al pensamiento jurídico-político contemporáneo.¹⁷

Sin embargo, en Bolivia el desafío por crear un Estado plurinacional se entrecruzó con la necesidad por parte del nuevo gobierno de reconstruir el Estado nacional, en el marco de un proceso de polarización regional y social expresado en la reafirmación de las demandas autonómicas de los departamentos de la Medialuna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando). Asimismo, una de las cuestiones más espinosas siguió siendo la traducción/mediatización en un texto constitucional de las grandes consignas acerca del Estado plurinacional y su organización territorial. Por último, la propia Asamblea Constituyente, que había comenzado por ser pensada como el espacio de imaginación radical o, tal como la definió el propio Álvaro García Linera, como el “lugar de escenificación del nuevo pacto social”, a poco de entrar en funciones, cayó en una zona de *impasse* y rápido desgaste político.

LOS AVATARES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La Asamblea Constituyente fue el centro de la tormenta, fue el lugar donde se expresó la crisis nacional. La crisis política se transfirió definitivamente a la Asamblea y la Asamblea estalló. Pero lo paradójico fue que, a pesar de su diseminación y fragmentación, de las crisis y dificultades, la Asamblea Constituyente logró mantener un hilo en el tejido para mantener a la propia Asamblea; logró aprobar su texto, logró sobrevivir, a pesar de las ciento cuarenta y cuatro modificaciones que hizo el Congreso.

RAÚL PRADA, entrevista de los autores, julio de 2009

Pese a la fuerte expectativa que la Asamblea Constituyente había suscitado entre las propias organizaciones sociales, ésta se convirtió rápidamente en la caja de resonancia de los grandes conflictos y tensiones que atravesaban el país, además de constituir uno de los espejos privilegiados desde el cual podía leerse con claridad la modalidad del vínculo que se estaba gestando entre organizaciones sociales movilizadas y nuevo gobierno.

Las diferencias entre estos dos actores arrancaron con la Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea Constituyente (marzo de 2006), que implicaba una fórmula de elección que establecía

la sobrerrepresentación de los partidos tradicionales y dejaba fuera la representación social autónoma, o la incluía intermediada por la estructura partidaria, principalmente el MAS.¹⁸ De este modo, el debate interno acerca de la participación de las organizaciones sociales en las listas del gobierno produjo un primer reposicionamiento del conjunto de las organizaciones: algunas de ellas, con mayor capacidad de presión y llegada al gobierno, como CONAMAQ, obtuvieron representantes directos en las listas del MAS; otras optaron por intervenir en los diferentes espacios y formas de lucha abiertos por el proceso de deliberación; por último, también estuvieron aquellas que resolvieron acompañar críticamente el proceso constituyente.

Los problemas surgidos en la asamblea fueron numerosos, pero la dinámica recursiva que ésta instaló tendió a potenciarlos. Como reflexiona el politólogo y ex constituyente Raúl Prada, uno de los problemas tuvo que ver con la cuestión del reglamento y “la aritmética de las decisiones”.¹⁹ Hubo que decidir cuál era el carácter de la constituyente (si era fundacional y, por ende, estaba por encima de las instituciones del Estado, o bien, derivada; si era originaria o modificatoria); asimismo, la discusión quedó trabada durante meses en la cuestión de si los artículos de la nueva constitución debían ser aprobados por “mayoría absoluta” —esto es, superior al cincuenta por ciento— o con los dos tercios de los constituyentes. En este marco de fuertes acusaciones y escalada del conflicto por cuestiones reglamentarias, la Asamblea Constituyente entró en un rápido proceso de desgaste.

La dinámica recursiva tuvo tres momentos de inflexión. El primero, relativo a las acciones del MAS, que apuntaron a un aglutinamiento de las organizaciones y movimientos sociales en torno del partido en el gobierno, a lo cual se fue sumando el propio peso específico que tempranamente iría asumiendo el liderazgo carismático de Evo Morales. Dicha orientación produjo otra inflexión, que fue instalando a las organizaciones sociales en un vínculo por momentos muy asimétrico en relación con el MAS y las decisiones adoptadas por Evo Morales. Esto se fue agravando de cara a la situación de *impasse* de la Asamblea Constituyente, lo cual incluyó la pérdida de su carácter soberano a partir de la intervención recurrente de ámbitos exteriores a la propia asamblea; primero desde el Ejecutivo (Presidente y Vicepresidente) y desde

los gobiernos regionales opositores; luego, hacia el final de la misma, y en un contexto de confrontación agudizada con las fuerzas de la derecha, del propio Congreso Nacional, que primero “autorizó” su prolongación y luego incluyó un centenar de reformas a los artículos ya aprobados, con el objetivo de salvar el texto constitucional (lo que se llamó “salida pactada”). De manera concomitante, y en una tercera inflexión, la dinámica recursiva instalada adoptó un carácter corporativo, producto de la fuerte capacidad de presión por parte de diferentes organizaciones sociales que apuntaron a inscribir sus demandas sectoriales en el propio texto constitucional.

Es verdad que, por otro lado, los errores y desprolijidades cometidos tempranamente por las fuerzas que comandaban el nuevo gobierno permitieron que la Asamblea Constituyente deviniera el espacio de relegitimación de las fuerzas opositoras. Sin embargo, a esto hay que agregar que esa “relegitimación” (relativa) aparecía asociada también con las características y las finalidades del nuevo espacio político inaugurado por la Asamblea Constituyente, y que daba cuenta de que, más allá de las divisiones y los bloqueos existentes, más allá de las oscilaciones o la aspiración por imponer la voluntad de las mayorías, era necesario construir cierto consenso incorporando a un sector democrático de “las minorías”, si de lo que se trataba en definitiva era de refundar la sociedad. Así las cosas, hacia afuera, la Asamblea Constituyente pareció confirmar un interminable regreso a la situación de “empate catastrófico”, caracterización de origen gramsciano retomada por García Linera, muy presente en el lenguaje político boliviano, que designa la incapacidad de los actores en pugna por definir un cambio decisivo en la correlación de fuerzas.²⁰

En un clima cargado de confrontaciones raciales y frente al bloqueo persistente de la oposición, de manera sorpresiva, en octubre de 2007, el gobierno anunció la llegada al “punto de bifurcación”, y aprobó en Oruro, a puertas cerradas y con una escasa presencia de la oposición, la Nueva Constitución Política del Estado. En este contexto, y luego de los resultados aplastantes del referéndum revocatorio que había convocado Evo Morales en agosto de 2008²¹ para contrarrestar el efecto de los referéndums regionales, la respuesta de las oligarquías locales tomó un giro

violento, reflejado en la multiplicación de pruebas de fuerza que incluyeron desde escenas públicas de escarnio y humillación hacia indígenas por parte de la Unión Juvenil Cruceña (imágenes que recorrieron el mundo), pasando por la quema y ocupación de instituciones estatales en Santa Cruz, hasta la masacre de indígenas en la región amazónica de Pando.

La versión de la Nueva Constitución Política aprobada en Oruro había recogido gran parte de lo expresado en el Pacto de Unidad, aunque varias definiciones quedaron en la nebulosa; entre ellas, la cuestión de cómo se saldarían los conflictos entre la justicia comunitaria y la justicia ordinaria. Finalmente, las “correcciones” aportadas en octubre de 2008, en el marco de una negociación con la derecha parlamentaria —y en contra de la opinión de la derecha regional—, introdujeron un centenar de modificaciones que afectaron el alcance de la reforma agraria (referéndum dirimidor, no retroactivo, acerca del límite de la propiedad agraria), de la justicia comunitaria (por un lado, la justicia comunitaria sólo tiene jurisdicción sobre los indígenas; por otra parte, el Tribunal Constitucional termina conformado solamente por individuos de carrera, a los que únicamente se les va exigir tener la cualidad de conocer la justicia comunitaria) y el llamado control social, entre otros.

Sin embargo, pese a que esta salida “pactada” redujo el alcance de las transformaciones propuestas por el Pacto de Unidad (vertidas inicialmente en la versión aprobada en Oruro), la Nueva Constitución Política constituyó una solución de transición ciertamente exitosa en el mediano plazo. Aun indianistas críticos como el sociólogo alteño Pablo Mamani, que sostienen que la Constitución formalmente es “intermedia entre lo liberal y lo comunal”, reconocen dos consecuencias positivas: la primera, que “la nueva constitución ayudará a que lo indígena pueda crear efectivamente un nuevo imaginario social e histórico porque se lo ‘reconoce’ y se lo nombra, y además, lleva en sus manos esta lucha frente a la oligarquía de los comités cívicos empresariales”; la segunda consecuencia, que “se crea un lugar o un vacío para que continúe la lucha por el poder y su institucionalidad en Bolivia. El intermedio en cierto modo es un vacío susceptible de ser rellenado por uno y otro lado. Por eso es que la lucha por el poder no se acaba ni con la aprobación de la nueva constitución

o su rechazo ni, si es el caso, con su implementación. La nueva constitución abre otra puerta de esta lucha por el poder”.²²

En efecto, más allá de las efectivas concesiones, la nueva Carta Magna, que fue sancionada y aprobada mediante referéndum en enero de 2009, con el 61,43 por ciento de los votos, conlleva una ampliación de los derechos políticos y sociales, individuales y colectivos, e introduce una serie de innovaciones, que incluyen el carácter plurinacional y comunitario del Estado, al tiempo que abre el espacio para la reelección del “binomio plurinacional” (Evo Morales-Álvaro García Linera), lo cual se hizo realidad en diciembre de 2009 con un contundente 64 por ciento de los votos. La victoria del MAS se hizo sentir incluso en los bastiones de la oligarquía regional, donde, aunque no ganó, logró avances significativos.

Por último, como ya hemos advertido, si el lanzamiento a la arena parlamentaria había implicado el primer desplazamiento del MAS, concebido originariamente como “el instrumento político de los sectores campesinos-indígenas”, la llegada al gobierno conllevó un nuevo giro político, que vino a confirmar su carácter aluvional, sobre todo de cara a la necesidad de construir el aparato del partido en las ciudades y las regiones donde éste no estaba implantado. Al mismo tiempo, este nuevo giro contribuyó a fortalecer la figura de Evo Morales en el proceso de decisiones y mediaciones. Una cuestión no menor es “que el desborde urbano del MAS obligó a cubrir el hiato entre partido de los sindicatos y partido hegemónico con la polémica —e inestable— figura del ‘invitado’, proveniente de las clases medias ciudadanas”.²³ Sin embargo, aunque muchos de los “invitados” suelen combinar “varias fuentes de legitimidad”, el proceso actual parece dar cuenta de una ampliación insólita de dicha figura. Así, si al comienzo del gobierno de Evo Morales, y en un escenario fundacional, pero también de extremada división socio-regional, los invitados por antonomasia eran los “compañeros de ruta” (intelectuales, ex militantes de partidos de izquierda tradicional, asesores de ONG), en la fase actual, de consolidación del proyecto, luego de la derrota política de las fuerzas de la derecha, la figura del “invitado” incluye perfiles extrapartidarios, venidos de la farándula o del periodismo, siendo el caso más resonante el de Jessica Jordan, Miss Bolivia 2007,

ungida como candidata a gobernadora por el departamento del Beni.²⁴

En resumen, hacia adentro de la Asamblea Constituyente, la dinámica recursiva entablada entre el MAS y las organizaciones sociales fue configurando un espacio atravesado por demandas contradictorias, donde convivieron las acciones de largo plazo (el objetivo de plasmar un proyecto de descolonización visible en el reconocimiento a las diferentes naciones indígenas y el reordenamiento de la estructura territorial en un Estado plurinacional, tal como lo planteaba el Pacto de Unidad) con las de corto plazo (la presión por obtener beneficios inmediatos, que en el plano del aparato del Estado se tradujo en la demanda de “pegas” —empleo público—, y en el ámbito de la Asamblea Constituyente apuntó a la búsqueda compulsiva de la “constitucionalización” de sus reclamos particulares). Ello tuvo lugar en medio de un proceso que conllevó el efectivo empoderamiento por parte de las organizaciones sociales, pero que al mismo tiempo fue confirmando la aceptación de una relación cada vez más asimétrica respecto del liderazgo de Evo Morales y el MAS.

LA REACTUALIZACIÓN DE LO NACIONAL-POPULAR Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO

El problema que interesa estudiar en esta investigación es el que propone la formación de lo nacional-popular en Bolivia, es decir, la conexión entre lo que Weber llamó la democratización social y la forma estatal. Con esto entendemos las pautas de socialización tal como existieron y sus índices de poder, así como los llamados proyectos de masa. En otros términos, la relación entre el programa y la factualidad.

RENÉ ZAVALA MERCADO, *Lo nacional-popular en Bolivia*

Otro de los datos novedosos del actual escenario latinoamericano de los últimos años es, sin duda, la reactualización de la narrativa nacional-popular. En términos generales, dicha narrativa se inserta en la memoria mediana (las experiencias nacional-populares de los años 30, 40, 50 y 70) y tiende a sostenerse sobre el triple eje de la afirmación de la nación, el Estado redistributivo y conciliador, y la relación entre líder carismático y masas organizadas

—el pueblo—. Su dinámica no es, empero, lineal, e históricamente suele instalarse en la tensión entre un proyecto nacionalista revolucionario, conducido por el pueblo junto al líder, y el proyecto de la participación controlada, bajo la dirección del líder y el tutelaje estatal. En el presente, la actualización de la narrativa nacional-popular aparece ligada centralmente a la reivindicación del Estado (como constructor de la nación), a un tipo de interpelación binaria (los clivajes nación/antinación y pueblo/oligarquía) y a un ejercicio de la política que instala una permanente tensión y/o conjunción entre las demandas de democracia directa y participativa, por un lado, y por el otro, la democracia representativa, decisionista y plebiscitaria, consolidada en las últimas décadas.

Pese a sus resonancias indianistas, la Bolivia de Evo Morales no escapa a esta tendencia general. Así, y aun reconociendo la potencia del proyecto autonómico de las organizaciones indígenas y rurales, es necesario decir que éste se halla lejos de presentarse en estado puro. Antes bien, en Bolivia la matriz comunitarista, expresada en la propuesta de creación de un Estado plurinacional, aparece cada vez más articulada y combinada con la narrativa nacional-popular. Su actualización alude a tres cuestiones mayores: la tradición en la cual se inscribe —reconociéndolo o no— el MAS, el tipo de discurso o interpelación central que lo recorre, y, más cercanamente, la visión estatalista de la actual gestión de Evo Morales.

En primer lugar, en términos de memoria mediana, la narrativa nacional-popular remite, sin duda, a la experiencia de “cogobierno” entre el MNR y la COB (Central Obrera Boliviana), en un primer momento del ciclo del nacionalismo revolucionario, entre 1952 y 1964. Como sostiene Luis Tapia, la relación entre identidad indígena y tradición nacional-popular nunca ha sido fácil ni unívoca, pero esta experiencia de rebelión, ilustrada por el cogobierno MNR-COB “queda como parte del proyecto político”²⁵ que atraviesa y alcanza el actual ciclo de rebelión. Los sindicatos cocaleros, de donde surge a la política Evo Morales, son en gran medida herederos de esta tradición, junto con ciertas inercias y reinenciones de lógicas comunitarias que, como ya hemos señalado, perviven bajo la “forma sindicato”.

En segundo lugar, en términos de memoria corta, la interpelación nacional-popular está directamente ligada al escenario de

conflicto configurado en la zona del Chapare, en la cual el movimiento cocalero debió confrontar no sólo con las diferentes gestiones gubernamentales sino también con la política de los Estados Unidos en la región. En efecto, entre los cocaleros, las medidas de erradicación violenta de la hoja de coca, dirigidas en los años 90 por los Estados Unidos, favorecieron la consolidación de una fuerte dimensión antiimperialista (más precisamente, antinorteamericana) de su acción política. En este marco, ante la existencia de un adversario externo poderoso, el discurso antiimperialista ha sido constitutivo de la identidad del movimiento cocalero.²⁶ En razón de ello, no es casual que la acción y el discurso de Evo Morales se inserten en una perspectiva política pragmática, pero integradora y multidimensional, donde conviven lógica antiimperialista —Nación contra Imperio— y llamado nacional-popular —pueblo contra oligarquías— con una afirmación de las naciones indígenas en tanto pueblos que deben ser reconocidos en su dignidad y con derechos plenos.

En tercer lugar, ya desde el gobierno, el proyecto boliviano fue adoptando una fuerte orientación estatalista. El vicepresidente Álvaro García Linera ha destacado la intervención del Estado no sólo como agente regulador sino también como activo productor de bienes y servicios. Según sus palabras, “el nuevo núcleo de poder es el Estado junto a la unidad productiva micro, pequeña y mediana, privada y comunitaria, urbana y rural, considerada la promotora del desarrollo nacional y la principal generadora de empleo”.²⁷ Según el mismo informe, elaborado por Bolpress en 2008²⁸ con datos proporcionados por la vicepresidencia, la participación del Estado ha crecido en las tres áreas centrales de la economía (hidrocarburos, agroindustria y minería): así, la renta petrolera aumentó de 27 a 72-75 por ciento y sus ingresos se elevaron de 500 a 2000 millones de dólares. El Estado reemplazó a las petroleras como cabeza de la economía y su participación en la generación de la riqueza productiva subió de 0,8 a 8 por ciento.

Asimismo, el gobierno se ha preocupado por garantizar el fortalecimiento del Estado a través del nombramiento de cuadros técnico-burocráticos eficientes, sobre todo en áreas clave de la economía, donde algunos se han atrevido a hablar incluso de una suerte de “blindaje” en relación con los movimientos sociales.²⁹

Ciertamente, el reconocimiento de la falta de cuadros técnicos provenientes del mundo campesino indígena parece haber sido un elemento fundamental en dicha política. No por casualidad, en los inicios, desde las vertientes más radicales del indianismo, la gestión gubernamental fue fuertemente criticada, y llegó a hablarse incluso de un “entorno blancoide”,³⁰ compuesto tanto por “invitados” del MAS, así como por cuadros técnicos que habrían participado de gobiernos anteriores. Pero importa señalar que el gobierno tampoco llevó a cabo lo que en el lenguaje boliviano se denomina “la masacre blanca”, esto es, cesantear a los funcionarios de la antigua gestión, una cuestión que alimentaba el miedo a una “revancha racial” que recorría los sectores medios urbanos. Así las cosas, la gestión está lejos de ilustrar la imposición de una suerte de supremacía racial indígena sobre una población blanco-mestiza. No sólo los sucesivos gabinetes que han formado parte del primer mandato de Evo Morales han mostrado heterogeneidad racial, sino que al propio Evo Morales no le ha temblado el pulso a la hora de desplazar ministros de origen indígena y reemplazarlos por mestizos-criollos, cuando los resultados políticos no lo satisfacían.

Por otro lado, en consonancia con la Nueva Constitución Política del Estado, el gobierno apuesta a la ampliación de las bases de la administración, por medio de un nuevo modelo de gestión pública plurinacional y comunitaria. En razón de ello, suele hablarse de un “Estado de transición” (Álvaro García Linera)³¹ o también de una “crisis del Estado” (Raúl Prada). Dicha propuesta programática impulsó a mediados de 2009 un “decreto de descolonización” (Decreto Supremo N° 212) que dispuso la creación de una escuela de gestión pública para formar a los futuros administradores del Estado Plurinacional, a fin de contribuir en “la construcción y consolidación de la nueva gestión del Estado, mediante la formación y capacitación de servidoras y servidores públicos”. Conceptos como el de “participación social” y “control social” son los nuevos ejes articuladores de una concepción descentralizada del Estado, que apunta a la suspensión “de los mecanismos de dominación y cuestiona la especialización weberiana del aparato público, avanzando a una nueva concepción de la gestión pública, que ahora tiene que ser plurinacional, comunitaria e intercultural”.³²

Sin embargo, con todas las innovaciones que supone, la Nueva Constitución Política vino a confirmar el rol central del Estado, lo cual genera sin duda tensiones en el interior del proyecto de descolonización. Como sostiene Raúl Prada, “la propia cuarta parte de la Constitución, dedicada a la organización económica, plantea tensiones fuertes. Habla de una economía plural pero a la vez sostiene el fortalecimiento del Estado; el Estado es el articulador de las distintas formas de organización económica; el Estado se hace cargo de toda la cadena productiva, de la industrialización de los recursos naturales, del apoyo a la pequeña y la microempresa. El Estado se convierte en el promotor de la economía plural, con lo cual hay una tensión entre el pluralismo económico y una visión estatalista”.³³

Ahora bien, en el orden del fortalecimiento de la matriz estatalista, YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) se constituyó en la empresa emblemática del nuevo gobierno. El proceso de nacionalización obligó a las empresas a firmar nuevos contratos y amplió enormemente la capacidad de captación de excedentes por parte del Estado. Dichas reformas incluyeron que el Estado pasara a determinar los volúmenes y precios de exportación, además de retomar el control de toda la cadena productiva hidrocarburífera a través de la refundación de YPF y la nacionalización de las refinerías y gasoductos. Sin embargo, el proceso de refundación de YPF continúa siendo muy accidentado, ya que en sólo tres años ésta tuvo seis presidentes —en promedio, uno cada seis meses—, lo cual ha conspirado en contra de la consolidación del carácter estratégico que la empresa tiene en el programa de nacionalización de Morales. Pero la máxima expresión de estas dificultades ha sido, sin duda, el escándalo por sobornos que involucró a uno de los presidentes de YPF, Santos Ramírez, en febrero de 2009, quien fue rápidamente destituido y procesado.³⁴ En esta misma línea, también se han proyectado varias fábricas estatales, algunas de ellas ya en marcha, como Papelbol, Lacteosbol, Cartonbol, Azucarbol, y se ha creado una nueva línea aérea estatal, Boliviana de Aviación, recientemente puesta en funcionamiento, que reemplaza a la quebrada Lloyd Aéreo Boliviano.³⁵

A su vez, el gobierno viene desarrollando una incipiente política social con vocación universalista que se ve reflejada en los

bonos de transferencia de la renta, tales como el bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad, el bono Juana Azurduy, el Programa Nacional de Alfabetización y el Programa Desnutrición Cero. Pese a tener todavía una capacidad de integración más simbólica que efectiva, la política social ha significado un cambio importante respecto de las políticas excluyentes anteriores. Por un lado, el bono Juancito Pinto está destinado a reducir los índices de deserción escolar —cada estudiante de primero hasta octavo grado (casi dos millones) recibe 200 bolivianos al año (alrededor de 30 dólares)—; la Renta Dignidad, que retoma y amplía el antiguo Bonosol, creado por Sánchez de Lozada en los 90, entrega 200 bolivianos por mes a los ancianos mayores de 65 años (un universo de 700 mil personas); y el bono Madre, Niño y Niña Juana Azurduy se otorga a las madres gestantes y a sus hijos, desde el nacimiento hasta los dos años (1820 bolivianos anuales a unas 250 mil personas). Por otro lado, el Plan Nacional de Alfabetización implementado en 2006 —que siguió el modelo cubano “Yo sí puedo” y que también se realizó en idiomas originarios— fue considerado un éxito, luego de lo cual, en 2008, Bolivia fue declarado territorio libre de analfabetismo. Éste ha sido continuado por el programa “Yo sí puedo seguir”, aunque sus desarrollos son más débiles. Por último, el Programa Desnutrición Cero está destinado a los menores de cinco años y apunta a reducir uno de los problemas más graves del país, la pobreza extrema, la cual, entre 2005 y 2009, descendió de 38,2 a 31,9 por ciento.³⁶ Asimismo, en el mismo período, la pobreza nacional bajó levemente, del 60,6 al 58,3 por ciento; la rural, del 77,6 al 73,8 por ciento.³⁷

A partir de 2006, el gobierno también impulsó una nueva ley de tierras, con la aprobación del reglamento de la ley N° 3545, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que se propone revertir las tierras improductivas, sobre todo en el Oriente boliviano, poco favorecido por la legendaria reforma agraria de 1953.³⁸ Uno de los ejes de las modificaciones de la anterior Ley INRA de los 90 es el endurecimiento de las condiciones para considerar que la tierra cumple una “función económica social”, requisito para poder conservarla. Aunque el referéndum posconstituyente aprobó un límite máximo de 5000 hectáreas, esa disposición no será retroactiva, como resultado de los acuerdos con la oposición congresal. Una segunda modificación es la titulación colectiva de

las tierras dotadas por el Estado a los campesinos e indígenas, que además favorece el acceso de las mujeres —históricamente rezagadas— a títulos agrarios. En los primeros cuatro años, el gobierno tituló unos quince millones de hectáreas en favor de comunidades rurales y pequeños agricultores.³⁹ Asimismo, se observa un reparto de tierras fiscales a campesinos e indígenas. Si en el período 1996-2005 se dotaron 36.814 hectáreas de tierras fiscales, en 2006-2009 se han dotado 1.009.626 hectáreas, casi la totalidad a comunidades indígena-campesinas de los departamentos de La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

En resumen, el gobierno parece estar encaminado a la concreción de un proyecto nacional productivo, entendido éste como la necesidad de democratizar el Estado y la realización de una política de transferencia de la renta, a partir de la modernización de la economía, de la aplicación de una política social de corte universalista y del reparto progresivo de tierras, entre otros.

ENTRE LAS ASPIRACIONES DEL "BUEN VIVIR" Y LA ILUSIÓN DESARROLLISTA

Como el Vivir Bien va mucho más allá de la sola satisfacción de necesidades y el solo acceso a servicios y bienes, más allá del mismo bienestar basado en la acumulación de bienes, el Vivir Bien no puede ser equiparado con el desarrollo, ya que el desarrollo es inapropiado y altamente peligroso aplicar cuando queremos construir el Vivir Bien.

"El vivir bien como respuesta a la crisis global", documento de la Cancillería boliviana para la Cumbre de Cambio Climático, 2009

Nuestro horizonte [es] de gran salto industrial, de Estado social protector, y el despliegue de la descolonización y la autonomía será, sí, más rápido, más contundente y más decidido.
ÁLVARO GARCÍA LINERA, diciembre de 2009⁴⁰

Tras su arribo al gobierno, el MAS presentó un Proyecto Nacional de Desarrollo que incluía una crítica del concepto clásico o tradicional de desarrollo y denunciaba la visión monocultural del Estado, en sus diferentes momentos (sea que hablemos de la etapa oligárquica, la desarrollista o la neoliberal), proponiendo

en su lugar incorporar una visión multidimensional del desarrollo, que involucrara directamente la temática de los recursos naturales, la biodiversidad y el medio ambiente, en términos de defensa de la tierra y el territorio y reconocimiento de los derechos culturales y territoriales de las poblaciones originarias. En consecuencia con estos principios, el nuevo Estado plurinacional boliviano incorporó la perspectiva del "buen vivir" (*sumaj kawsay* en quechua; *suma qamaña* en aymara) asociada a la cosmovisión de los pueblos andinos, como modelo contrapuesto a la idea de "vivir mejor" propia de la cosmovisión occidental, sustentada en una visión monocultural y depredadora de la naturaleza.

La perspectiva del "buen vivir", que apunta a permear cada vez más el nuevo lenguaje emancipador en América Latina, se halla incorporada tanto en la Constitución de Bolivia, para señalar una forma de aspiración, opuesta a la cosmovisión occidental dominante, como en la Constitución de Ecuador, para contraponerla al modelo de desarrollo hegemónico. En ambos casos aparece como una de las consignas más movilizadoras, suerte de horizonte emancipatorio que apunta a tender un puente entre pasado y futuro, entre matriz comunitaria y mirada ecologista. Pero, mientras que para la politóloga (y actual funcionaria) ecuatoriana Ana M. Larrea,⁴¹ éste es un "concepto en construcción", para el antropólogo boliviano Xavier Albó,⁴² detrás del concepto se esconde la lógica de las comunidades de muchos pueblos indígenas originarios, contrapuestos a las sociedades y poderes dominantes y su plasmación como parte del país. Más aún, mientras que en Ecuador se dota de un largo linaje a la filosofía del "buen vivir", que va desde Aristóteles, hasta el ecosocialismo y el ecofeminismo,⁴³ en Bolivia, proceso político más aut centrado, ésta sólo está ligada a la visión de los pueblos originarios.

Esta línea ecocomunitarista es representada por el propio canciller boliviano, David Choquehuanca, un intelectual aymara de amplio recorrido en el mundo de las ONG, quien lo ha expresado de este modo:

Nosotros hemos definido nuestro norte, cuando se ha puesto el "vivir bien" [en la Nueva Constitución Política]. Cuando nosotros nos reuníamos en los años '90, '92, los aymaras decían "queremos volver a ser, porque nosotros hemos dejado de ser;

ya no queríamos ser, pero queremos volver a ser nuevamente". ¿Qué significa eso? Queremos volver a ser *camiris*. *Camiri* es una persona que vive bien; la palabra rico y la palabra pobre no existen en su idioma. Y los quechuas han dicho "nosotros queremos volver a ser *kapac*". *Kapac* es una persona que vive bien. Y los guaraníes han dicho "nosotros queremos volver a ser *iyambaé*". *Iyambaé*, que se mueve de acuerdo a las leyes de la naturaleza, no por las leyes hechas por el hombre. Por eso decimos "vivir bien".⁴⁴

Reflejo de esta aspiración es también el documento "El vivir bien como respuesta a la crisis global", producido por la Cancillería boliviana para la Cumbre de Cambio Climático que se realizó en 2009 en Copenhague (ya citado en el epígrafe), así como el propio discurso que Evo Morales pronunció en esa oportunidad.⁴⁵ También lo es el reconocimiento de parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, que el 29 de agosto de ese mismo año nombró a Evo Morales "Héroe Mundial de la Madre Tierra" por su lucha en favor del medio ambiente y acordó declarar el 22 de abril como Día Mundial de la Pachamama. Una vez más, reflejo de esta aspiración fue también el llamado a una contracumbre sobre el cambio climático —luego del fracaso en Copenhague— que se realizó en Cochabamba en abril de 2010 y congregó a más de 35.000 asistentes y ciento cuarenta y dos países representados.

Así, todo parecería indicar que, en Bolivia, la preocupación por la cuestión ambiental se halla "naturalmente" incorporada en la visión de los pueblos indígenas-campesinos, más aún si tenemos en cuenta que son ellos quienes están entre los principales perjudicados por la actual expansión del modelo de acumulación, centrado en la sobreexplotación de los recursos naturales y la expansión de las fronteras hacia los territorios antes considerados como improductivos. Ciertamente, en gran parte de los países latinoamericanos, los pueblos originarios aparecen como uno de los actores clave del actual giro ecoterritorial de las luchas,⁴⁶ frente a la profundización del modelo extractivista, que en sus consecuencias económicas, culturales y socioambientales impacta severamente sobre las condiciones y formas de vida tradicional.⁴⁷

Sin embargo, mal haríamos en caer en el terreno de las idealizaciones. La realidad que nos presenta el modelo de desarrollo boliviano está lejos de estas aspiraciones ecocomunitaristas —que encarnan intelectuales como Choquehuanca y se expresan en la plataforma de tantas organizaciones campesino-indígenas y ambientalistas— y se halla mucho más cerca del neodesarrollismo con base extractivista⁴⁸ que practican gran parte de los países vecinos. En efecto, no olvidemos que una de las consignas de la agenda de octubre fue la "nacionalización de los hidrocarburos", punta de lanza de un programa de reformas nacionalistas tendiente a recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, que catapultó a YPFB como la empresa estrella del proceso de cambio. Tal es la fuerza de este programa de reformas centrado en la recuperación de los recursos naturales, que en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se habla de "régimen de recursos naturales estratégicos".⁴⁹ En un contexto de aumento del precio de las *commodities*, y en el cual las nacionalizaciones se tradujeron en la multiplicación del excedente obtenido en relación con otras épocas, las expectativas de abrir nuevas explotaciones es tal, que el gobierno boliviano ha redoblado la apuesta. Así, ha venido reforzando un discurso industrialista que enfatiza un proyecto de desarrollo estratégico basado en las industrias extractivas (optimización productiva la búsqueda de valor agregado a través de la industrialización del gas; explotación del hierro, del litio; megaminería a cielo abierto; expansión de los agronegocios; construcción de megarrepresas, entre otras), al tiempo que muestra serias dificultades para admitir los conflictos socioambientales que se abren en función de la consolidación de dicha matriz productiva.

En consecuencia, el panorama que presenta Bolivia en materia de desarrollo es paradójico, pues si bien la política de Evo Morales apunta al quiebre de una visión monocultural del Estado, no es menos cierto que, en consonancia con otros países de la región, se ha reactivado una ilusión desarrollista, en este caso, en clave nacionalista, alentada por la apertura de nuevas oportunidades económicas y demandas de *commodities* por parte del mercado externo. El propio lenguaje de Evo Morales aparece atravesado por fuertes ambivalencias: hacia afuera, presenta una clara dimensión ecocomunitarista, sobre todo, a la hora de referirse a

las consecuencias de la crisis climática, de proponer ante las Naciones Unidas, como hemos señalado, una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, sobre la base de la filosofía del "buen vivir". Pero, hacia adentro, el gobierno reafirma un discurso y una práctica nacional-productivistas que se hallan en continuidad con el paradigma extractivista.⁵⁰

Pocos documentos oficiales dan cuenta de esta clara ambivalencia. Uno de ellos es, sin duda, el texto elaborado por la Cancillería boliviana para la citada cumbre climática de Copenhague, donde aparece planteado en forma de dilema:

Depende de si lo más aconsejable es escoger una matriz de desarrollo productivo integrada por hidrocarburos, minería, agropecuaria, agroindustria, industria manufacturera, turismo y forestal, o escoger una matriz de construcción del vivir bien basada en producción local para el consumo de productos locales dentro de los límites de la madre naturaleza, organizada por medio del intercambio y la distribución de productos entre nuestras comunidades y diferentes alturas (pisos ecológicos) en regiones autosuficientes. *De una respuesta correcta a esta reflexión depende si será posible garantizar a corto plazo la paz social y la estabilidad económica, política, social e institucional, basadas en la esperanza de lograr un pacto social por el empleo con las empresas privadas nacionales y las inversiones extranjeras que estén dispuestas a garantizar derechos laborales, obligaciones tributarias y medioambientales, como también de un correcto análisis del avance de las crisis en los próximos años y nuestra capacidad de resolver los problemas y enfrentar o sortear los obstáculos causados por este avance.*⁵¹

Frente a ello, cabe preguntarse cómo explicar estas ambivalencias que se advierten entre el discurso hacia afuera y la práctica político-económica hacia adentro. En este punto, existen dos cuestiones que pueden ayudar a comprender el nudo de la contradicción. La primera de ellas es que Bolivia cuenta con una fuerte tradición extractivista, al tiempo que su historia lleva también la marca recurrente del despojo en relación con las riquezas producidas por sus recursos naturales. Con esto no buscamos decir que Bolivia lleva el extractivismo en el ADN, pero no resulta extraño que en un marco en el cual la contracara es, precisamente,

un imaginario del despojo reiterado —de tierras y riquezas—, el gobierno boliviano promueva "la utilización de las reservas de hidrocarburos y minerales para *industrializar el país* y emanciparlo de la condena histórica del capitalismo mundial a ser un mero exportador de materias primas".⁵² Las recientes apelaciones de Álvaro García Linera acerca del "gran salto industrial" (citadas en el epígrafe) demuestran con elocuencia la potencia de un imaginario en el cual ahora convergen historia extractivista, tradición nacional-popular y desarrollismo estatista.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el tema central en la agenda del gobierno no es precisamente la discusión acerca de las consecuencias socioambientales que podría traer la expansión de un estilo de desarrollo extractivista, sino más bien el control de la renta por parte del Estado (en el marco de "la querrela del excedente", como diría René Zavaleta⁵³). Asimismo, esta obturación no es casual, ya que, como sucede en otros países latinoamericanos, el extractivismo es, en definitiva, la condición de posibilidad de la política social que actualmente realiza el gobierno, que hemos repasado en el apartado anterior.⁵⁴

Dichas cuestiones acercarían a la Bolivia actual aún más a la visión nacional-popular, que tradicionalmente ha enfatizado la perspectiva de la expoliación de los recursos naturales, al tiempo que suele proyectar una visión del desarrollo basada en la confianza en la expansión de las fuerzas productivas; posición que tiende a minimizar tanto los efectos destructivos que esto genera en términos socioambientales y de aniquilación de formas de vida diferentes, como las luchas de resistencia. De este modo, el gobierno de Evo Morales termina por desarrollar una crítica unilateral a la actual matriz productiva, expulsando la problemática ambiental hacia afuera, como si ésta fuera patrimonio exclusivo de los países más ricos y desarrollados, y, más allá de las asimetrías existentes, no involucrara en absoluto la dinámica industrialista adoptada por su gobierno.⁵⁵

Pese a su obturación, los conflictos devienen cada vez más "dilemas" por obra de la propia dinámica social, muy especialmente cuando la expansión del modelo extractivista desemboca en el avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios y los derechos ambientales, reconocidos por la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y por la legislación interna-

cional. Así, por ejemplo, esto parece suceder a raíz de la expansión de la frontera hidrocarburífera en la Amazonía paceña, donde se iniciaron labores sísmicas petroleras en territorio indígena Mositén.⁵⁶ Dichas actividades se realizaron sin respetar el derecho de consulta y consentimiento previo que tienen las comunidades indígenas con relación a esa actividad.⁵⁷ Frente a la consigna del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), "Por una Amazonía sin petróleo", la primera reacción de Evo Morales apuntó a descalificar a las organizaciones ambientalistas, acusándolas de recibir fondos del exterior (sobre todo, de USAID, la agencia norteamericana de cooperación). El propio presidente presentó las aristas del dilema: "Los originarios quieren ahora una Amazonía sin petróleo. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Con qué plata vamos a pagar el [Bono] Juancito Pinto?".⁵⁸

Situaciones igualmente preocupantes se han producido respecto de la pequeña y mediana minería, tan generalizada en Bolivia. Así, por ejemplo, en julio de 2009, organizaciones como el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) y FOBOMADE prepararon propuestas en relación con cuatro cuencas que presentan graves problemas medioambientales, vinculados a la actividad extractivista.⁵⁹ La respuesta de la Federación de Trabajadores Mineros consistió en amenazar con una marcha en contra de las organizaciones ambientalistas, en defensa de sus fuentes de trabajo. Finalmente, frente al pedido de cuarenta comunidades afectadas por la contaminación, en noviembre de 2009 se declaró la emergencia ambiental en la zona de Huanuni. Sin embargo, el Consejo de Defensa de la Minería (que incluyó un frente entre cooperativistas, empresarios y sectores laborales) planteó nuevamente el apoyo a la actividad y calificó de "ecoterroristas" a las organizaciones ambientalistas.⁶⁰

Por otro lado, no son pocas las organizaciones campesinas e indígenas que transitan de una a otra posición, con notoria ambivalencia, más allá de la proliferación de discursos plurinacionales en defensa de la Pachamama. Desde la perspectiva de las organizaciones rurales e indígenas, la defensa de la tierra y el territorio coexiste con otra visión, vinculada a la cuestión de los derechos territoriales y departamentales sobre los recursos naturales (lo cual, en su momento, se discutió también en el seno del Pacto de Unidad).⁶¹

En realidad, el alcance de esta demanda es un tema poco explorado que bien valdría la pena investigar en lo que respecta tanto a la experiencia cooperativista en la zona de Oruro (ligada al imaginario privatizador de los noventa)⁶² como a la visión, por momentos, "panterritorial" de ciertas organizaciones campesino-indígenas. Tampoco es casual que, en ese marco, el discurso de las organizaciones ambientalistas, como LIDEMA, o aun el FOBOMADE, tengan un tinte moderado y tiendan a instalarse en el terreno de la autolimitación.

En resumen: por un lado, la reapropiación de la renta, en función de una política de expansión y explotación de los recursos naturales, y la tensión que ésta presenta con una perspectiva de cuidado del ambiente, hacen que la discusión en torno al estilo de desarrollo extractivista devenga todavía una suerte de punto ciego, impensado, cuando no irritante y sumamente molesto para el gobierno, cuando éste se manifiesta en términos de conflicto. Los avances sobre la frontera amazónica son un claro ejemplo de ello; ni qué decir de la rápida estigmatización que sufren las organizaciones ambientalistas cada vez que realizan una denuncia, ante la existencia de escasos controles y de cuantiosos pasivos ambientales, debido a la acumulación y multiplicación de actividades extractivas.

Por otro lado, es cierto que, por el momento, el "buen vivir" es una superficie amplia sobre la cual se van inscribiendo diferentes sentidos emancipatorios, en los que lo comunitario aparece como marco inspirador y núcleo común, más allá de las dificultades de traducirlo en experiencias (no es posible idealizar el mundo comunitario indígena ni tampoco ignorar las diferentes declinaciones de lo comunitario en América Latina) o en políticas públicas concretas (donde la amenaza es su temprano vaciamiento en manos de retóricas gubernamentales o su posible vampirización por parte de los organismos internacionales, como ya ha sucedido con otras nociones de gran potencialidad política). Sin embargo, en el marco de una visión fuertemente industrialista, la perspectiva contenida en la filosofía del "buen vivir" aparece notoriamente diluida. Más aún, esta consigna que, en parte, sostiene el proyecto de descolonización, pareciera tener un alto valor simbólico, de fuerte contenido identitario, pero en los hechos se halla desactivada, neutralizada por la poderosa narrativa industrialista

del modelo, “el gran salto industrial” prometido luego del aplastante triunfo electoral de Evo Morales con el sesenta y tres por ciento de los votos en diciembre de 2009, uno de cuyos componentes estrella es el satélite de comunicaciones Túpac Katari —encargado a China— y el anuncio de constitución de una pretenciosa “agencia espacial boliviana”.

EL LABORATORIO BOLIVIANO Y SUS ASECHANZAS

Bolivia es como un laboratorio, ahora, por muchas razones. Están pasando cosas, algunas muy previstas en el tiempo, otras quizá más lentas. Para mí es una experiencia muy importante, conocer el Estado colonial que todavía no hemos derrumbado del todo, pero que permite conocer cómo funciona desde adentro. Nosotros siempre hemos sido críticos, pero hemos estado fuera del Estado. Cuando uno entra acá, lo primero que dice es: Bueno, aquí hay que conocer cuál es la lógica de ese Estado colonial que hemos criticado y ver cómo cuajamos para que definitivamente se acabe ese proceso colonial.

ESTEBAN TICONA, antropólogo y sociólogo, director de la Academia Diplomática, Cancillería Boliviana, entrevista de los autores, julio de 2009

Creo que no debemos actuar mecánicamente, sin crítica, haciendo apología de lo que ocurre, congratulándonos por el crecimiento de la mayoría, no debemos entramparnos en una visión coyunturalista. La tarea es desarrollar una mirada crítica y una conducción política estratégica, debemos contar con la imaginación radical instituyente para encaminar el proceso en sentido de su profundización.

RAÚL PRADA, entrevista de los autores, julio de 2009

Los conflictos y tensiones que han recorrido el escenario boliviano durante el primer mandato de Evo Morales son numerosos y deben ser comprendidos desde diferentes escenas y niveles. En primer lugar, asistimos a la emergencia de un proyecto de cambio innovador, mediante la figura del Estado plurinacional, una de cuyas fuentes es la narrativa indianista, expresada en la propuesta política del Pacto de Unidad. Sin embargo, por un lado, la posibilidad de constitucionalizar un Estado plurinacional conformado por diversas autonomías (administrativas y territoriales)

debió armonizar con el avance y consolidación de un Estado regulador, no sólo de las relaciones económicas sino también de las que se establecen entre el propio gobierno y las organizaciones sociales afines. Este proceso conllevó una conquista efectiva de poder por parte de las organizaciones sociales, pero también una transferencia de la conducción del proceso hacia el liderazgo carismático de Evo Morales. Por otro lado, la dinámica de confrontación entre Oriente y Occidente fue diseñando un escenario cada vez más polarizado, en el cual las relaciones de fuerza y las lógicas políticas profundizaron la división entre dos bloques antitéticos: de un lado, movimientos y organizaciones abroquelados en torno de la figura del líder (en su versión nacional-popular) y, de otro lado, las oligarquías regionales —hoy políticamente derrotadas— atrincheradas en la Medialuna, con sus prefectos y estamentos institucionales.

Estos procesos, tanto como la impronta del Estado en la esfera económica, han redundado en un fortalecimiento de la matriz estatalista. En este sentido, en su “factualidad” el actual modelo boliviano aparece marcado por una dimensión reguladora, pero también centralista y verticalista, propia de la matriz nacional-popular y su modo de concebir y hacer política, lo cual nos invita a pensar no sólo en las efectivas rupturas, sino también en las continuidades históricas —tanto en sus componentes más disruptivos como en aquellos conservadores.

En este marco, resulta difícil sopesar cuál será el alcance y la evolución de las tensiones existentes entre Estado plurinacional y matriz estatalista. Sin embargo, no hay que olvidar que, antes que el “capitalismo andino” (propuesto inicialmente por García Linares hacia 2007) o el “socialismo del siglo XXI” (fórmula venezolana que en Bolivia no cuenta con muchos adherentes), el gran desafío político que va diseñando el horizonte utópico de la nueva Bolivia es la construcción del Estado plurinacional y comunitario.⁶³ Como “Estado de transición”, los contornos programáticos se hallan todavía en proceso de discusión y su puesta en acción deparará sin duda la aplicación de una nueva ingeniería social y, a la vez, de una gran transformación cultural, cuya compleja fórmula todavía está en ciernes y aparece desde ya atravesada por numerosas tensiones, que incluyen, entre otras cosas, el creciente devenir del MAS en partido hegemónico.

Por otro lado, la inflexión estatalista se ha hecho en favor de la expansión de un modelo neodesarrollista, con base extractivista, que descuida enormemente las consecuencias socioambientales y la destrucción de formas de vida diferentes que aquél conlleva, aun si se realiza en nombre del desarrollo nacional o de la redistribución de la renta a partir de políticas sociales. Simultáneamente, el discurso de Evo Morales parece concentrarse en la crítica hacia la matriz productiva que presentan los países centrales, como si la problemática ambiental fuera solamente una cuestión que se agota —como presuponen de manera unilateral ciertos discursos antiimperialistas— en la división Norte-Sur. Por encima de las asimetrías existentes entre centro y periferia capitalistas, las consecuencias de la crisis climática y el sostenimiento irracional de una determinada matriz productiva requieren también una mirada sistémica, esto es, un examen hacia adentro, sobre el propio modelo de desarrollo vigente; muy especialmente si el horizonte del proyecto de descolonización es la puesta en práctica del “buen vivir”, asociado a la cosmovisión de los pueblos indígenas. En esta línea, habrá que ver si la contracumbre realizada recientemente en Cochabamba se expresa también en la efectiva apertura de un debate interno sobre los estilos de desarrollo adoptado, hoy tan necesario como inevitable.

Por último, la propuesta de elaborar un proyecto político a largo plazo (el Estado plurinacional, en tanto proyecto general de descolonización) coexiste con la inflexión corporativa-comunitaria que en distintos escenarios han mostrado las organizaciones sociales afines al MAS. Esta realidad coloca un interrogante mayor, no sólo respecto de las organizaciones sociales sino también de cara a los nuevos desafíos que debe enfrentar el MAS en el segundo mandato, de consolidación del gobierno. En términos más simples, asistimos al final de la resistencia regionalizada que caracterizó buena parte del primer mandato presidencial (y que se expresó a través del “empate catastrófico”) y nos desplazamos hacia la inauguración de un nuevo tiempo, de creciente hegemonía del MAS. No es de extrañar, entonces, que este segundo mandato esté marcado por nuevos dilemas y desafíos que irán atravesando el proceso de construcción de la nueva hegemonía.

¿Cómo situarse, entonces, frente a este panorama tan complejo que presenta a una Bolivia en movimiento, tanto hacia

adentro —en la compleja relación entre movimientos sociales y gobierno del MAS— como hacia afuera, frente a lo que parece señalar el inicio de una nueva hegemonía en torno al MAS? ¿Cuál será el alcance del proceso, aún abierto, de reformas —en lo económico, lo político, lo social y lo cultural— encaradas por el gobierno de Evo Morales en su apuesta por romper con los moldes de una sociedad neocolonial? ¿Cómo terminar con las relaciones de dominación, incrustadas en la memoria histórica y en las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, permitiendo así la construcción de un Estado plurinacional, que garantice el reconocimiento y respeto de las diferentes naciones que contiene y que, al mismo tiempo, esté en condiciones de asegurar una estructura unitaria y más igualitaria? Más aún, ¿cuáles pueden ser las consecuencias sociales, económicas y ambientales de la adopción de un modelo de desarrollo extractivista, más allá de las elocuentes declaraciones en defensa de la “madre tierra” o de la adopción de la filosofía del “buen vivir”?

Tal como hemos visto, los interrogantes, tanto como los dilemas, son colosales. En este sentido, hay que decir que la situación de Bolivia en el contexto latinoamericano continúa siendo excepcional. Pocos son los países que se atreven a plantearse tales desafíos. De ahí, las ineludibles expectativas emancipatorias que el laboratorio boliviano continúa suscitando, pero también los peligros y asechanzas que recorren el propio proyecto de cambio.

NOTAS

- 1 Pablo González Casanova, *Sociología de la explotación*, CLACSO, Buenos Aires, 2006.
- 2 René Zavaleta Mercado, *Lo nacional-popular en Bolivia*, Plural, La Paz, 2008.
- 3 Silvia Rivera Cusicanqui, *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa, 1900-1980*, con nuevo prefacio de la autora, Yachaywasi-Aruwiyiri, La Paz, 2003.
- 4 Álvaro García Linera (coord.), *Sociología de los movimientos sociales, estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*, Diakonia-Oxfam, La Paz, 2004.

- 5 En quechua y en aymara, *marka* significa pueblo o ciudad, y *ayllu* designa a la comunidad que vive en un territorio de propiedad común que es trabajado de manera colectiva. Es considerada la base de la estructura social andina.
- 6 Designación del imperio Inca en su época de máximo desarrollo, antes de la conquista española. Abarcaba una franja de territorio desde el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia, hasta el norte de Chile y el noroeste de la Argentina. Tawantinsuyu es una voz quechua que significa "las cuatro regiones", o *suyus*: Chinchaysuyu al norte, Qullasuyu al sur, Antisuyu al este y Contisuyu al oeste.
- 7 Véase, en el presente volumen, la nota 88 en página 131.
- 8 Para aproximarse al tema del surgimiento y evolución del MAS, véase Hervé Do Alto, "Cuando el nacionalismo se pone el poncho. Una mirada retrospectiva de la etnicidad y la clase en el movimiento popular boliviano, 1952-2007", en Maristella Svampa y Pablo Stefanoni (comps.), *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, El Colectivo-OSAL (CLACSO), Buenos Aires, 2007.
- 9 *Ibidem*.
- 10 Al respecto, véase Maristella Svampa, *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Siglo XXI-CLACSO, Buenos Aires, 2008; y "Movimientos sociales, matrices sociopolíticas y nuevos contextos en América Latina", en *Revista Paraguaya de Sociología*, número especial 50 aniversario, Asunción, julio de 2010.
- 11 Propuesta de las organizaciones indígenas, originarias, campesinas, y de colonizadores hacia la Asamblea Constituyente, recogido en Maristella Svampa y Pablo Stefanoni (comps.), *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, ob. cit.
- 12 Se trata de la región que abarca la Amazonía, el Chaco y el Oriente bolivianos.
- 13 Las TCO son una forma de propiedad comunitaria que se comenzó a implementar con la ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) de 1996. Allí se las definía como "espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a las cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles". Como dato adicional, Bolivia tiene una superficie de 109.858.100 hectáreas; descontando las manchas urbanas, cuerpos de agua, salares, carreteras, etc., la superficie objeto de saneamiento es de 106.751.723 hectáreas, de la cual sólo el 65 por ciento es económicamente aprovechable. Véase Bruno Fornillo, "Perfiles de un régimen de propiedad alterado. La redistribución de tierras durante el gobierno de Evo Morales", ponencia presentada en el II Encuentro Internacional "Teoría y práctica política en América

- Latina. Nuevas derechas e izquierdas en el escenario regional", Mar del Plata, 3-5 de marzo de 2010.
- 14 Algo que puede ser caracterizado como el pasaje de la heteronomía discursiva a la autonomía discursiva, y que algunos sintetizan en la diferencia entre "indigenismo" e "indianismo" propuesta por Fausto Reinaga en *La revolución india* (Fundación Amáutica Fausto Reinaga, El Alto, Bolivia, 2001) y retomada en la actualidad por diferentes sectores indianistas.
- 15 Marxa Chávez León, "Autonomías indígenas y Estado plurinacional", en revista *OSAL*, año IX, N° 24, CLACSO, octubre de 2008.
- 16 Conceptualización elaborada por la Asamblea del Pueblo Guaraní y enriquecida por las diferentes organizaciones participantes del proceso (6 de julio de 2006).
- 17 Para el tema, véase Boaventura de Sousa Santos, "La reinención del Estado y el estado Plurinacional", en revista *OSAL*, año VIII, N° 22, CLACSO, septiembre de 2007.
- 18 Patricia Chávez y Dunia Mokrani, "Movimientos sociales en la Asamblea Constituyente. Hacia la reconfiguración de la política", en Maristella Svampa y Pablo Stefanoni (comps.), *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, ob. cit.
- 19 Entrevista de los autores, julio de 2009.
- 20 Véase Álvaro García Linera, *La potencia plebeya*, CLACSO-Prometeo, Buenos Aires, 2008.
- 21 Evo Morales fue ratificado en su cargo al obtener el 67,43% de los votos. Los prefectos de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni también fueron ratificados en sus cargos. Los prefectos opositores de La Paz y Cochabamba fueron revocados al obtener resultados adversos.
- 22 Pablo Mamani, "¿Un Estado realmente plurinacional?", en *Le Monde Diplomatique*, La Paz, diciembre de 2008.
- 23 Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni, "MAS: Las ambivalencias de la democracia corporativa", en VV. AA., *Mutaciones del campo político en Bolivia*, PNUD-Idea Internacional, La Paz, 2010.
- 24 El proceso viene acompañado también por otras decisiones no menos inquietantes; entre ellas, el inusual pedido —que fue aceptado— de ciertos grupos vinculados a la Unión Juvenil Cruceña, quienes, ante el desbande de las fuerzas de la derecha, solicitaron su integración al MAS. Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni (ob. cit.) denominan a esto "la cooptación de los eslabones más débiles de la derecha".
- 25 Luis Tapia, *Política salvaje*, CLACSO-Muela del Diablo-Comuna, La Paz, 2008.
- 26 La región cocalera del Chapare (entre Cochabamba y Santa Cruz), adonde Evo Morales migró en su juventud y en la cual desarrolló su carrera política y sindical, es una región con fuerte presencia de la izquierda clásica (PC, MIR y sus múltiples divisiones y reconfiguraciones)

- y muy débil presencia indianista, cuya cuna fue la región aymara del lago Titicaca y la región cocalera de los Yungas de La Paz.
- 27 Citado en "Bolivia. Balance de dos años y medio de nacionalismo indígena 'post neoliberal'", publicado en Bolpress el 21 de julio de 2008. Reproducido en el semanario *Peripecias* N° 108 el 6 de agosto de 2008, www.peripecias.com/ciudadania/588BoliviaNacionalismoIndigena.html (consulta: junio de 2010).
 - 28 *Ibídem*.
 - 29 Véase, en el presente volumen, la entrevista a Raúl Prada.
 - 30 Pablo Mamani, "Evo Morales, entre entornos blancoides, rearticulación de las oligarquías y movimientos indígenas", en revista *Willka*, año I, N° 1, Centro Andino de Estudios Estratégicos, El Alto, 2006.
 - 31 García Linera despliega una reflexión sobre el Estado de transición en un triple nivel: el Estado como la construcción de una (nueva) coalición política dominante; el Estado en términos de nueva institucionalidad, y por último, el Estado como idea o relación de legitimidad política, como "monopolio del poder simbólico". *La potencia plebeya*, ob. cit.
 - 32 Véase la entrevista a Raúl Prada en este mismo libro.
 - 33 *Ibídem*.
 - 34 Santos Ramírez fue acusado de firmar contratos millonarios con empresas fantasma y cobrar coimas por la construcción de una planta separadora de líquidos. Lejos de ser un recién llegado o un "invitado", Ramírez, un dirigente de origen quechua, provenía del núcleo duro del MAS. El tema no es menor si consideramos que, tanto a nivel nacional como internacional, Evo Morales cuenta con un fuerte capital ético. Al respecto, véanse las referencias a este escándalo de corrupción en las entrevistas al vicepresidente Álvaro García Linera y a Raúl Prada, en la segunda parte de este volumen.
 - 35 Pablo Stefanoni, "Gobierno Evo: gestión y desafíos", informe presentado en la Conferencia La izquierda en el Gobierno II: comparando Europa y América Latina, Fundación Rosa Luxemburg, Bruselas, 2010, http://rosalux-europa.info/events_en/left_gov_ii_spanish/ Asimismo, el Estado comenzó a controlar, comprar y financiar gradualmente de tres mil a diez mil toneladas de soja, y durante 2009 esperaba manejar hasta ochenta mil toneladas, que representan el diez por ciento de la producción total. Aunque la minería sigue en manos de una decena de corporaciones transnacionales, de empresas medianas y de cooperativas, actualmente el Estado se perfila como el cuarto exportador. Sólo en los dos primeros años y medio de gobierno, la participación estatal en la economía boliviana habría pasado del 13 al 22 por ciento, todavía muy lejos del 50 por ciento al que aspira el gobierno. El crecimiento de la economía boliviana ha sido confirmado por diversos organismos internacionales, entre ellos la CEPAL. Véase su *Estudio económico de América Latina y el Caribe 2008-2009*, publicado en julio de 2009.
 - 36 Según datos oficiales presentados por Naciones Unidas y el gobierno, entre 1996 y 2008 la pobreza extrema en el país bajó de 41,2 a 32,7 por ciento. Diario *La Razón*, La Paz, 11 de junio de 2010.
 - 37 Datos de UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas), Ministerio de Economía y Finanzas, citado en Pablo Stefanoni, ob. cit.
 - 38 Aquella reforma agraria se propuso acabar con las haciendas "semifeudales" en el Altiplano y los valles, repartiendo la tierra individualmente a los campesinos, y crear un polo de agroindustria capitalista moderna en el Oriente, especialmente en Santa Cruz.
 - 39 Boletín *Somos Tierra*, N° 10, INRA, La Paz, octubre de 2009.
 - 40 Entrevista reproducida en el diario *Clarín*, Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 - 41 Ana M. Larrea, "La disputa de sentidos por el buen vivir como proceso contrahegemónico", mimeo, presentado en el Laboratorio Internacional "Estrategias alternativas al desarrollismo", Fundación Rosa Luxemburg, Escobar (provincia de Buenos Aires), 12-14 de abril de 2010.
 - 42 Para un análisis del modo como aparece el tema en la Nueva Constitución, véase Xavier Albó, "Suma qamaña = el buen convivir", en *Revista OBETS*, N° 4, Universidad de Alicante, España, 2009.
 - 43 Véanse las reflexiones de la feminista Magdalena León y del economista y ex constituyente Alberto Acosta, en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comps.), *El Buen Vivir, Una vía para el desarrollo*, Abya Yala, Quito, 2009.
 - 44 Véase, en la segunda parte de este volumen, la entrevista realizada a David Choquehuanca en julio de 2009.
 - 45 Discurso de Evo Morales que se reproduce en la segunda parte de este volumen.
 - 46 Entendemos por giro ecoterritorial la potenciación de un lenguaje de valoración sobre el territorio, que da cuenta del cruce entre matriz indígena-comunitaria y lenguaje ambientalista, en oposición al discurso eficientista y la visión desarrollista propia de la narrativa dominante.
 - 47 Asimismo, recordemos que la crítica indígena a la matriz desarrollista, tan arraigada en el subcontinente, data de largo tiempo y coincide en ello con las perspectivas de la ecología política y la economía ecológica, elaboradas aquí y en otras latitudes. Hemos abordado el tema en "La disputa por el desarrollo: conflictos socioambientales, territorio y lenguajes de valoración", en José de Echave, Raphael Hoetmer y Mario Palacios Páez (coords.), *Minería y territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*, Cooperación, Conacami y Programa Democracia y Transformación Global, Lima, 2009.
 - 48 Hay que aclarar que en América Latina el desarrollismo ha conocido diferentes variantes y momentos, pero en líneas generales privilegia la producción en sí misma y continúa asimilando desarrollo a crecimiento económico. Sin embargo, lo que hace décadas aludía a un modelo industrial-productivista, con fuerte intervención del Estado, hoy ha sido

- reemplazado por un modelo neodesarrollista, con una base extractivista (algo fuertemente criticado en los años 50 y 60), en gran parte transnacionalizado, que se apoya sobre nociones muy tramposas como las de desarrollo sustentable, gobernanza y responsabilidad social empresaria.
- 49 Lo cual se contrapone a todas luces con la visión propuesta por la nueva constitución ecuatoriana, en la cual la Naturaleza aparece dotada de derechos. Se trata del llamado "giro biocéntrico", del cual habla Eduardo Gudynas en "La ecología política del giro biocéntrico en la Constitución del Ecuador", *Revista de Estudios Sociales*, N° 32, Bogotá, 2009. Sobre este tema, véase también la observación y comentario de Raúl Prada en la entrevista publicada en la segunda parte de este volumen.
- 50 Véase, en este mismo volumen, el final de la entrevista realizada a Álvaro García Linera.
- 51 "El vivir bien como respuesta a la crisis global", documento de la Cancillería boliviana para la Cumbre de Cambio Climático en Copenhague, 2009; el destacado es nuestro.
- 52 Pablo Stefanoni, "Las tres fronteras del gobierno de Evo Morales", en Maristella Svampa y Pablo Stefanoni, *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, ob. cit.; el destacado es nuestro.
- 53 Título de uno de los artículos más importantes del libro de Zavaleta, *Lo nacional-popular en Bolivia*, ob. cit.
- 54 Sobre el tema del extractivismo vinculado con gobiernos progresistas y de izquierda y políticas sociales en América Latina, véanse Eduardo Gudynas, "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo", en Jürgen Schuldt *et al.*, *Extractivismo, política y sociedad*, CAAP, CLAES, Quito, 2009; Maristella Svampa, "Imaginario desarrollista, giro eco-territorial y modelos de desarrollo", mimeo, ponencia presentada en el Segundo Seminario Internacional de Pensamiento Crítico: Teoría y Praxis Política Latinoamericana, realizado en Ecuador entre el 8 y el 10 de diciembre de 2009.
- 55 La problemática de la deuda ecológica de los países desarrollados hacia las naciones menos favorecidas es el núcleo del documento presentado por el gobierno boliviano en Copenhague, ya citado. Por otro lado, en la Declaración Final de la Contracumbre realizada en Cochabamba en abril de 2010, no se hace mención alguna a los combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo), principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero (recordemos que tres países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América [ALBA], Ecuador, Bolivia y Venezuela, producen petróleo y gas), y en su conferencia ante las Naciones Unidas, Evo Morales llamó a los países desarrollados "a descolonizar el espacio atmosférico, para posibilitar una equitativa distribución entre todos los países". Véase Tony Phillips, "Cambio climático, ALBA y combustibles fósiles. La lucha por el espacio atmosférico", en *Le Monde Diplomatique*, La Paz, junio de 2010.
- 56 Para el tema, véanse los artículos de Pablo Cingolani publicados en www.bolpress.com: "¿Petroandina comete delitos de etnocidio contra el

- pueblo Mosetén?", www.bolpress.de/art.php?Cod=2009070707, 7 de julio de 2009 (consulta: junio de 2010); "Organizaciones indígenas y campesinas repudian las acciones del Ministerio de Hidrocarburos contra Mosetenes y Lecos", www.bolpress.de/art.php?Cod=2009071104, 11 de julio de 2009 (consulta: junio de 2010); "¿Falso afán petrolero?", www.bolpress.de/art.php?Cod=2009081009, 9 de agosto de 2009 (consulta: junio de 2010).
- 57 También se realizan sin el control de las organizaciones indígenas que está estipulado en la licencia ambiental concedida a Petroandina, y todo parece indicar que lo mismo podría llegar a suceder con las organizaciones matrices de los pueblos Chimán, Lecos de Apolo, Tacana, y las comunidades quechua-tacana de San José de Uchupiamonas y los Ese Ejas de Eyiyoquibo (véase Pablo Cingolani, ob. cit.).
- 58 Citado en el diario *La Razón*, La Paz, 26 de julio de 2009.
- 59 Las actividades mineras en los departamentos de Oruro y Potosí han causado un impacto ambiental negativo que se manifiesta en salinización de los suelos, pasivos mineros altamente contaminantes, acidificación de las aguas, fuentes de agua afectadas y migración de la población. Una preocupación era Huanuni, la "capital del estaño", donde ni siquiera existe un dique de colas. Frente a esta situación, y pese al pedido de las comunidades, ha habido escasas políticas de remediación.
- 60 Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales, "Ahora tildan de ecoterroristas, luego pedirán represión", reproducido en www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-bolivia/default/ (consulta: junio de 2010). En este sentido, es necesario aclarar que en Bolivia coexisten la pequeña y mediana minería con pocos megaproyectos a cielo abierto, entre ellos, San Cristóbal y San Bartolomé, ambos explotados por empresas transnacionales. Más allá del *boom* del estaño producido en los últimos años, estos dos yacimientos mineros mencionados, que explotan plata y otros minerales, concentran el 75 por ciento de las exportaciones mineras. Hasta fines de 2009, todavía se hallaba en discusión la nueva ley minera que prevé la apertura a la megaminería a cielo abierto. Recientemente, un informe sobre impactos ambientales realizado por una consultoría para la mina San Cristóbal indicaba no sólo la ausencia de controles estatales, sino sobre todo el uso insostenible de agua, en una zona (sudoeste de Potosí) donde se hallan en proceso de concesión nada menos que sesenta proyectos mineros (FOBOMADE, reproducido en www.noalamina.org). En fin, no sólo los controles ambientales son casi nulos, sino que, además, no existe un inventario nacional de yacimientos en actividad.
- 61 En su negociación con el MAS, del cual varias organizaciones formaban parte entonces, algunas de las propuestas originales del Pacto de Unidad sufrieron modificaciones, entre ellas, la controvertida idea de territorialización de los recursos naturales. En clave nacional-popular, la territorialización sería leída en términos de demandas de recuperación

de los recursos naturales por parte del Estado. Como afirmó Evo Morales en su discurso de asunción: “Con seguridad, el movimiento indígena originario, así como nuestros antepasados, soñaron recuperar el territorio y cuando estamos hablando de recuperar el territorio *estamos hablando de que todos los recursos naturales deben pasar a manos del pueblo boliviano, a manos del Estado boliviano*”, discurso de asunción de Evo Morales en 2006, reproducido en Maristella Svampa y Pablo Stefanoni (comps.), *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, ob. cit.; el destacado es nuestro.

- 62 “Las cooperativas mineras son producto del neoliberalismo, parte de los 27.000 mineros despedidos entre 1985 y 1987 —durante la crisis de los precios del estaño y la destrucción de la Corporación Minera de Bolivia— formaron cooperativas. Otros se fueron a cultivar coca al Chapare o a trabajar de cuentapropistas a la ciudad de El Alto”, afirma la historiadora Magdalena Cajías, citada por Pablo Stefanoni en su artículo “Un viaje a Hunani, el corazón de la Bolivia minera”, *Página/12*, 20 de octubre de 2006. Recordemos que, en medio del *boom* del estaño, en octubre de 2006, se desató un conflicto que enfrentó a cooperativistas mineros con trabajadores de la minería estatal, por el control del cerro Posokoni, en Huanuni. El enfrentamiento causó al menos dieciséis muertos, le costó el cargo al ministro de Minería y rompió la alianza que había entre los cooperativistas mineros y el gobierno nacional. Luego de ello, se llevó a cabo una política tendiente a la nacionalización, similar a la del sector energético.
- 63 Este desafío ha sido rebautizado recientemente por el propio vicepresidente como “socialismo comunitario”, y retomado por Evo Morales en el discurso de asunción de su segundo mandato, 7 de febrero de 2010, <http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=91228>